

Señores

**JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO CON CONOCIMIENTO EN ASUNTOS
LABORALES DE SARAVERA (A)**

jprctosarav@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA
RADICADO: 81-736-31-89-001-2024-00195-00
ACCIONANTE: ALBERTO PARADA SUAREZ
ACCIONADO: JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE CUBARÁ, BOYACÁ

ASUNTO: PRONUNCIAMIENTO FRENTE ACCIÓN DE TUTELA.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, domiciliado y residente en Cali, identificado con la cédula de Ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial de **COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A.**, domiciliada en Bogotá D.C., con NIT 800.153.993-7, según consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., que se aporta con el presente documento, respetuosamente procedo a pronunciarme frente a la Acción de Tutela referida en el asunto, solicitando desde ya negar las peticiones de la misma, con base en los siguientes argumentos:

CONSIDERACIÓN PRELIMINAR

De manera previa a la exposición de los motivos por los cuales el Despacho constitucional debe declarar la falta de causa para demandar, es fundamental que tenga en cuenta que, de todas maneras, no sería procedente ningún tipo de reconocimiento constitucional ante falta de

demostración de la supuesta *vulneración a los derechos fundamentales invocados*¹ y el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional dispuesto para el mecanismo en contra de providencias judiciales. En otras palabras, es importante que su Honorable Despacho tenga en consideración que, pese a que en el caso en concreto no se reúnen los presupuestos para dictar un fallo que acceda a las pretensiones de la acción de tutela, de todos modos, se hace evidente el empleo de la presente acción constitucional obviando los requisitos esenciales para que una acción de tutela prospere y la especialidad que requiere la misma frente a las providencias judiciales. En todo caso, se deja por sentado que el accionante trata de que se declare la nulidad de lo actuado en el proceso declarativo reivindicatorio desde el auto que admitió la demanda de reconvención, pues a su juicio no era procedente, empero el accionante nunca usó los medios jurídicos como el recurso de reposición en contra del auto en cita, momento en el cual pudo realizar las objeciones que por esta senda ha manifestado, por lo anterior, el señor Parada dejó pasar la oportunidad para impugnar la decisión judicial y por ende no puede tratar de revivir instancias concluidas cuando fue su propia incuria la que llevó a la firmeza de la decisión.

I. IMPROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL- EL ACCIONANTE DISCUTE ASUNTOS DE MERA LEGALIDAD.

Como se ha enunciado en líneas precedentes y se ha expuesto de manera enunciativa, con la acción de tutela impetrada por parte del accionante se pretende la disyuntiva de un debate meramente legal en un proceso de única instancia, como consecuencia de las decisiones adoptadas por el Juez de conocimiento que le fueron adversas al señor Alberto Parada. Así, vale la pena recordar que la naturaleza propia de este tipo de acción constitucional en contra de providencias judiciales se enfoca en realizar un juicio de validez, más no de corrección, lo que impide que sea empleada para reabrir un análisis sobre asuntos meramente legales. De este modo, no cabe duda

¹ La parte accionante no aporta pruebas que acrediten la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso y mínimo vital, toda vez que simplemente alega tal afectación, sin exponer o probar el verdadero perjuicio o daño que se le ha generado, las cuales no pueden ser constatadas por el mero dicho de esta. Al no haber prueba de su dicho, el juez constitucional no puede acceder al reconocimiento del amparo.

de que en el caso que nos ocupa, resulta improcedente esta herramienta constitucional, pues el señor Parada está refutando el hecho de que, en el proceso reivindicatorio por el iniciado, se haya admitido una demanda de reconvención promovida por su señora madre, la señora María Angustias Suarez, pues a su juicio dicho acto procesal no es permitido en un proceso verbal sumario. Pese a ello su señoría, es impensable que se nulite lo actuado porque ese argumento debió ser expuesto por el accionante como recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda de reconvención, pese a ello guardó silencio, motivo por el cual, incluso si en gracia de discusión llegara a concluirse que existió alguna nulidad (que no lo es) de todas maneras estaría saneada porque el señor Parada siguió actuando en el proceso, incluso formulando una solicitud de nulidad por falta de notificación de la admisión de la demanda de reconvención, que incluso le fue negada, pues aquella providencia se le notificó por estados, debido a que ya era parte del proceso. Sin más, el accionante siguió actuando en el proceso hasta llegar a la sentencia, por lo cual no puede en este momento revivir trámites judiciales legalmente concluidos.

Es evidente que la formulación de esta acción tiene lugar porque el juez de conocimiento del proceso declarativo le negó las pretensiones de la demanda al señor Alberto Parada, y por ese motivo, el demandante inconforme con ello, trata de usar esta vía residual como una herramienta para re abrir un debate jurídico concluido en donde tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa con plenas garantías, y así discutir sobre aspectos netamente legales que no han trascendido a la órbita de los derechos fundamentales.

Sobre este asunto, la Corte Constitucional a través de sentencia SU128/21 de la Magistrada Ponente Cristina Pardo Schlesinger, recordó como dicho Tribunal ha interpretado la acción de tutela contra providencias judiciales como un *“juicio de validez”* y no como un *“juicio de corrección”* del fallo cuestionado².

² Corte Constitucional, Sentencia T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

*“Este enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional **sea utilizado indebidamente como una instancia adicional** para discutir los asuntos de índole probatorio **o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial**. En el marco de cada proceso, **las partes cuentan con los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos**.” (Subraya y negrilla fuera del texto)*

Sobre este tema, la misma corporación a través de sentencia SU-573 de 2019 determinó que:

*“la acreditación de esta exigencia, **más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel**”.* (Subraya y negrilla fuera del texto)

Conforme con lo anterior, no basta con que la parte actora alegue la violación del derecho fundamental al debido proceso, para entender acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional, la cual tiene tres finalidades desarrolladas a través de la jurisprudencia. Esto, por cuanto la relevancia constitucional en sus tres esferas se delimita de la siguiente manera:

*“(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, **por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad**;*

(ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente,

(iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”³. (Subraya y negrilla fuera del texto)

Conforme con las finalidades que han sido expuestas para que proceda la acción de tutela, no cabe duda de que, en el caso en marras, a través de esta acción constitucional lo que pretende el extremo accionante es alegar una nulidad procedimental (que ni siquiera corresponde a alguna de las causales del artículo 133 del CGP), trasgrediendo así, uno de los requisitos esenciales para la procedencia de este mecanismo en contra de providencia judicial, como lo es, la relevancia constitucional.

La Corte Constitucional a través de la sentencia SU-573 de 2019, reiteró tres criterios de análisis para establecer si una tutela es de relevancia constitucional, de la siguiente manera:

“(…) Primero, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional y no meramente legal y/o económico. Las discusiones de orden legales o aquellas relativas exclusivamente a un derecho económico deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse en materias de carácter netamente legal o reglamentario que han de ser definidos por las jurisdicciones correspondientes”⁴⁵¹. Un asunto carece de relevancia constitucional cuando: (i) la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que de ésta se desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales; o (ii) sea evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un interés general”⁴⁶¹.

³ Corte Constitucional, Sentencia SU-573 de 2019, M.P Carlos Bernal Pulido.

(...) Segundo, “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”^[47]. La jurisprudencia constitucional ha reiterado que la cuestión debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional^[48]. Dado que **el único objeto de la acción tutela es la protección efectiva de los derechos fundamentales, es necesario que el asunto que origina la presentación de la acción contra una providencia judicial tenga trascendencia para la aplicación y el desarrollo eficaz de la Constitución Política, así como para la determinación del contenido y alcance de un derecho fundamental.** Por tal razón, los asuntos en los que se invoca la protección de derechos fundamentales, pero cuya solución se limita a la interpretación y aplicación de normas de rango legal, no tienen, en principio, relevancia constitucional.

4.7. Tercero, **la tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales.** Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios”^[49], pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal”^[50]. En ese orden de ideas, la tutela en contra de un auto o una sentencia exige valorar si la decisión se fundamentó en una actuación ostensiblemente arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido proceso.^[51] Solo así se garantiza “la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales como de los de las demás jurisdicciones”^[52]. (Subraya y negrilla fuera del texto)

En este orden de ideas, no cabe duda de que el asunto que nos ocupa carece de la relevancia constitucional que ha establecido la Corte Constitucional como requisito elemental para la

procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales. Lo anterior por cuanto, no solo se pretende que el Juez Constitucional actúe como superior analista de la aplicación legal de las disposiciones procesales en torno a la admisión o no de una demanda de reconvención en un proceso que sigue el trámite verbal sumario, partiendo de un juicio de corrección sobre la supuesta indebida o incorrecta aplicación de la norma, sino que además, pretende a través de esta tutela subsanar su propia incuria al no haber hecho uso de los medios de impugnación en el curso del proceso declarativo, porque aquel no interpuso recurso en contra del auto admisorio de la demanda de reconvención para refutar los presupuestos que hoy plantea, y finalmente esta acción carece de una argumentación tendiente a materializar la supuesta vulneración de los derechos fundamentales invocados que se habría producido con la decisión del Juez de conocimiento. En consecuencia, como ha reiterado la jurisprudencia, no basta solo con mencionar los derechos cuya vulneración se predica, sino que debe de manera inequívoca, establecerse la relación de las decisiones con su afectación. Lo anterior conlleva a que esta tutela no solo no proceda de manera transitoria al no encontrarse patente un riesgo inminente, sino que por lo demás debe ser desestimada al desconocer los requisitos esenciales para este tipo de acción en contra de providencias judiciales, y porque desdibuja la naturaleza misma de esta herramienta constitucional, a través de la pretensión de que el juez de tutela actúe como analista o interprete de la correcta aplicación o no de un trámite procesal, más aún cuando el interesado guardó silencio en la oportunidad debida.

II. LA ACCIÓN DE TUTELA ES UN MECANISMO JUDICIAL ESTRICTAMENTE SUBSIDIARIO-NO ES UNA HERRAMIENTA PARA SUBSANAR LA INCURIA DEL ACCIONANTE

No es procedente la acción de tutela en el caso concreto, por cuanto el actor contaba con otros medios judiciales efectivos y eficaces en la Jurisdicción Ordinaria que hacen inviable la prosperidad de la tutela, lo expuesto toda vez que, se reitera el señor Parada fundamenta su tutela en el hecho de que el juez del proceso declarativo admitió una demanda de reconvención de la señora María Suarez, en el proceso reivindicatorio que él inició, sin embargo se destaca que dicho auto fue proferido el 31 de mayo de 2023 y notificado mediante estados del 1 de junio de la misma anualidad,

sin embargo dentro del término de ejecutoria el hoy accionante no interpuso el recurso de reposición como medio de impugnación de esa decisión judicial, por lo tanto, no puede pretender subsanar su incuria, o descuido a través de este remedio que es netamente excepcional.

El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política de Colombia establece que:

“Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

La Corte Constitucional estableció que, por ser la acción de tutela un procedimiento breve y sumario, este procedimiento SOLAMENTE tiene un carácter PREVENTIVO más NO DECLARATIVO, cuando en Sentencia de Tutela 124 de 1994 dijo:

“En consecuencia tiene la función de evitar vulneraciones a los derechos fundamentales, o su amenaza, como se señala claramente en el artículo 86 de la Constitución Política. Y resulta lógico que así sea por cuanto, en tratándose de derechos fundamentales, su carácter inherente a la persona hace que el ejercicio mismo del reconocimiento del derecho, para su amparo, sea directo, inmediato, factual, como resultado de la existencia misma del sujeto titular.

Cuando no medien circunstancias, incluso relacionadas con derechos fundamentales, sin que los hechos planteados exijan valoraciones probatorias y complejas definiciones de situaciones jurídicas de rango legal, el juez de tutela debe abstenerse de fallar, por no responder la acción a los fines perseguidos en la demanda.

Lo expuesto, encuentra desarrollo en el llamado carácter residual o subsidiario de la tutela. No sólo porque ésta no es el único medio judicial para la defensa de los

derechos fundamentales, los cuales también y de manera ordinaria o general deben ser amparados por los cauces de la jurisdicción ordinaria o especiales de la República, y sólo de manera exceptiva mediante la acción de tutela; sino porque su carácter preferente y sumario, que indica por lo primero agilidad en el tiempo y por lo segundo brevedad en las formas y procedimientos, aspectos estos que no permiten al juez de tutela abordar con pleno discernimiento asuntos que sólo pueden ser objeto de elaboración y decisión, luego de sustanciar procesos, cuyo diseño procesal permita el esclarecimiento de situaciones de hecho y la declaración de derechos litigiosos menos inmanentes que los derechos fundamentales en sí mismos considerados.

Así lo entendió el propio constituyente al determinar que esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (in. 3o. art. 86 C.P)” (Subrayado fuera del original)”.

De lo anteriormente transcrito se puede establecer que, como en el presente caso ocurre, cuando los hechos del proceso merecen una leve disquisición, esta acción de tutela no puede abrirse paso. En otras palabras, cuando al romper no se advierte una violación de derechos fundamentales, el juez debe abstenerse de conceder el amparo reclamado.

Además, es de amplio conocimiento que el máximo tribunal constitucional ha sido enfático al decantar que cuando los sujetos procesales dejan de usar los recursos previstos para el trámite judicial en el que se encuentran incursos, no es procedente que el juez de tutela pueda suplir esa negligencia o inactividad, tal y como se puede observar en lo expuesto en la sentencia T-732 de 2017:

“La Sala no observa que la accionante haya acudido a los medios ordinarios de defensa judicial a su alcance y mucho menos que la hubiere alegado al interior del

proceso. Por tanto, no es procedente el amparo en tanto se estaría supliendo la inactividad por negligencia o incuria de una de las partes procesales y se estaría empleando la tutela como una herramienta que premia la desidia, negligencia o indiferencia de los actores.”

Efectivamente, en el presente caso no se advierte la violación de un derecho fundamental toda vez que lo acá discutido es un derecho legal de índole procesal que vuelve improcedente la acción impetrada y segundo el accionante dejó pasar las oportunidades para impugnar la decisión judicial que hoy reprocha a través de esta acción.

En efecto, de acuerdo con los hechos narrados en la tutela en los que el actor manifiesta que existe una supuesta vulneración al debido proceso al admitir la demanda de reconvención lo cierto es que, contra el auto admisorio, el interesado guardó silencio. Por lo que, PUDO HABER SOLICITADO su inadmisión o rechazo a través de la formulación del recurso de reposición, en el cual demostrara la existencia del supuesto error procedimental, sin embargo, no lo hizo. Por lo tanto, el juez de tutela debe abstenerse lógicamente de adoptar una decisión que pueda afectar, sin un fundamento probatorio suficiente, derechos derivados de la sentencia que zanjó el proceso.

III. IMPOSIBILIDAD DE NULITAR LO ACTUADO ANTE AUSENCIA DE CAUSAL ESPECÍFICA

No puede perderse de vista que el accionante pretende que se declare la nulidad de lo actuado en el proceso declarativo, incluyendo la providencia que admitió la demanda de reconvención, empero es evidente que las causales de nulidad están previstas de manera taxativa en la ley y aunado a ello no todo yerro constituye causal de nulidad. Ante ese panorama es imperioso verificar el artículo 133 del C.G.P., el cual dispone:

ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
 2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.
 3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.
 4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.
 5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
 6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.
 7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación.
 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.
- Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.

PARÁGRAFO. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece.
(subrayas fuera de texto original)

En cuanto a la oportunidad y trámite de las anteriores causales de nulidad la norma las describe en los artículos 134 y siguientes del Código General del proceso. En el artículo 135 y 136, se establece que:

ARTÍCULO 135. REQUISITOS PARA ALEGAR LA NULIDAD. La parte que alegue una nulidad deberá tener legitimación para proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.

No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla.

(...)

El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien carezca de legitimación.

(subrayas fuera de texto original)

ARTÍCULO 136. SANEAMIENTO DE LA NULIDAD. La nulidad se considerará saneada en los siguientes casos:

1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin

proponerla.

2. Cuando la parte que podía alegarla la convalidó en forma expresa antes de haber sido renovada la actuación anulada.

3. Cuando se origine en la interrupción o suspensión del proceso y no se alegue dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que haya cesado la causa.

4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa.

(subrayas fuera de texto original)

De la normatividad expuesta anteriormente, se extrae que:

1. **No existe causal de nulidad** que se ajuste a los hechos narrados por el accionante, por cuanto aquel refiere que no se debió admitir la i) demanda de pertenencia en reconvención en el proceso reivindicatorio, pero lo cierto es que frente a la primera afirmación el interesado tuvo a su disposición, una vez proferido auto admisorio de aquella, el recurso de reposición contra esta providencia, acto procesal del cual no hizo uso y guardó silencio, por lo tanto esa decisión quedó debidamente ejecutoriada. Así las cosas, ese supuesto yerro no es una causal de nulidad de las que expresamente prevé el artículo 133 del CGP, por lo tanto no puede soslayarse en que las nulidades no contemplan margen de interpretación o extensión a supuestos facticos que no están taxativamente enlistados en la ley.
2. Pese a que no existe causal de nulidad, **la irregularidad no fue alegada oportunamente**, pues, luego de admitida la demanda de reconvención, el interesado debió recurrir el auto, entonces después de ocurrido el “hecho”, actuó en el proceso sin proponerla. Siendo improcedente alegarla cuando habiendo tenido la oportunidad guardó silencio. La

notificación del auto que admitió la demanda de pertenencia en reconvención, se realizó por estados, el día 1° de junio de 2023 y el interesado en recurrir, guardó silencio. Así como tampoco contestó la demanda de reconvención ni presentó excepciones previas. Asistió a las audiencias a saber la del 19 de noviembre de 2024 y no alegó la irregularidad, por lo tanto cualquier vicio del proceso se entiende subsanado.

3. Subsidiariamente, de entenderse irregularidad alguna, esta fue saneada, ante la convalidación y teniendo en cuenta que a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa, en tanto se le otorgó a todas las partes la oportunidad para contestar, pedir pruebas, participar en la práctica de aquellas, alegar de conclusión, Etc, sin que la ausencia del uso de ellas implique desmedro de sus derechos, como es el caso del señor Parada, quien no recurrió el auto admisorio de la demanda de reconvención que hoy reprocha.

Incluso, en palabras de la Corte Suprema de Justicia, en Auto 505/21, MP. José Fernando Reyes Cuartas, respecto de los principios que rigen las nulidades, recordó:

(...) las nulidades se rigen por el *principio de trascendencia*. Este implica que el criterio fundamental para analizar y declarar una nulidad debe girar en torno al impacto efectivo de una supuesta irregularidad en la garantía del derecho al debido proceso. Como estableció la Corte:

“El artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 dispone que sólo las irregularidades que impliquen violación del debido proceso podrán servir de base para que la Sala Plena de la Corte anule el proceso. De acuerdo con ello se trata de nulidades circunscritas de manera expresa a las violaciones ostensibles y probadas del artículo 29 de la Constitución. Estas situaciones son especialísimas y excepcionales, y sólo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y

cierta, que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del derecho al debido proceso”⁴

25. Ese principio de *trascendencia* también significa que, para que la vulneración invocada tenga potencial de anulación, debe ser significativa y trascendental respecto de la decisión adoptada, es decir, tener “repercusiones sustanciales”⁵. Cuando no existe ese impacto efectivo en la garantía del derecho al debido proceso, la petición de nulidad está llamada a fracasar.

26. Asimismo, las nulidades procesales también se rigen por los principios de *protección y convalidación*. El primero indica que la declaración de una nulidad debe estar precedida de un estudio en el que se verifique la lesión efectiva para los intereses de quien la propone. De manera coherente con el principio de *protección*, el principio de *convalidación* se refiere al hecho de que, en ciertos casos, el afectado puede ratificar de manera expresa o tácita el trámite o actuación irregular. En esos supuestos, esa ratificación permite asumir que no hubo una lesión a los derechos o intereses de los sujetos procesales.

(subrayas fuera de texto original)

Ello quiere decir que, se exige la existencia de un defecto procesal el cual menoscabe los derechos de los sujetos procesales (trascendencia) y además se exige que se examine la conducta del interesado en el momento inmediato a la ocurrencia de la irregularidad, para verificar si la ratificó expresamente o guardó silencio frente a ella (convalidación). La convalidación, expresa o tácita, demuestra claramente la ausencia de afectación de sus intereses, lo que hace improcedente su alegación en instancias posteriores. Siempre que no se prive a las partes de su defensa.

⁴ Auto 054 de 2004

⁵ Auto 054 de 2004

Ahora, la parte interesada tuvo oportunidad y no alegó la irregularidad. Posteriormente en la etapa de alegaciones finales previo a emitir sentencia el 21 de noviembre de 2024, pretendió invocar la supuesta irregularidad, pero distinta de la esbozada en este asunto constitucional, pues se trató de la irregularidad que señaló como “*se deseche la demanda de reconvención, por presentar acumulación con el proceso reivindicatorio*”, pero lo cierto es que, no existe tal acumulación de dos procesos, sino una demanda de reconvención. Entonces, si bien se realizó dicha disquisición dentro del curso del proceso (en la audiencia donde se profirió el fallo) lo cierto es que: 1) ya previamente el tutelante, a través de su apoderado, había guardado silencio frente al auto que admitió la demanda de reconvención, la contestación de la demanda e incluso había actuado en el proceso en varias oportunidades distintas presentando recursos por otros aspectos al motivo de esta queja constitucional, participó en la etapa de pruebas, hizo uso del interrogatorio y contrainterrogatorio, por lo tanto, no existen supuestos que se enmarquen en una causal de nulidad o afectación al debido proceso del accionante.

- **VALORACIÓN DE LOS REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN DE TUTELA- RECUENTO JURISPRUDENCIAL.**

El artículo 86 de la Constitución Política de Colombia posibilita que cualquier ciudadano presente la acción de tutela cuando considere vulnerados y/o amenazados sus derechos fundamentales por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. De manera excepcional, se permite cuestionar una sentencia proferida dentro de un proceso judicial, cuando se avizore que el Juez de instancia ha conculcado los derechos de las partes en litigio. Lo anterior en aras de salvaguardar los principios de autonomía judicial y seguridad jurídica

En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional ha sostenido que la acción de tutela contra providencias judiciales solo procede cuando se cumplen los estrictos requisitos que han sido señalados por la profusa jurisprudencia constitucional sobre la materia. Es así como en la sentencia C-590 de 2005 se introdujeron los requisitos generales de procedibilidad que se deben cumplir a cabalidad cuando se vaya a cuestionar una sentencia y/o providencia proferida dentro de un proceso

judicial: “de la acción de tutela contra una sentencia o una providencia judicial, los cuales, el juez al analizar la procedencia de la acción constitucional, debe verificar que se cumplan: (i) que el asunto tenga relevancia constitucional; (ii) que la solicitud de amparo cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iii) que el accionante identifique, de forma razonable, los hechos que causan la violación y que esta haya sido alegada dentro del proceso judicial, en caso de haber sido posible; (iv) que el fallo impugnado no sea de tutela, y (v) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir a la tutela”⁶

De igual forma, en la Sentencia de Constitucionalidad comentada se distinguieron criterios de carácter general y específico para que el juez de tutela aborde el análisis de fondo de la solicitud de amparo. En lo que tiene que ver con los criterios generales, se trata de las restricciones de índole procedimental y/o parámetros de obligatorio cumplimiento que se deben presentar para que el juez de tutela aborde el análisis de fondo de la sentencia y/o providencia judicial y fueron se clasificaron de la siguiente forma:

Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

- a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional: Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

⁶ Sentencia T 199 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

- b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada: De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
- c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
- d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Si bien es cierto, la parte accionante en el caso de marras enuncia la existencia de una irregularidad procesal, no relata la ausencia del uso de las oportunidades procesales con las que contaba el actor para colocarla de presente al fallador, guardando silencio y actuando posteriormente, frente a ello la norma es clara al determinar que no es posible alegar nulidad a quien pudiendo alegarla no lo hizo.
- e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad

en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos, requisito entonces que no se encuentra desarrollado en la presente acción constitucional.

- f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

Frente a los criterios de **carácter específico**, estos son los yerros que se deben advertir en la decisión adoptada por el Juez de instancia y que hacen necesaria la intervención del juez de tutela:

- “a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.*
- b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.*
- c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.*
- d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.*
- f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.*
- g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones*

en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.”

En lo que tiene que ver con el defecto fáctico, en la Sentencia de revisión de tutela SU116-18 se explicó que este se presenta en los siguientes casos:

“Defecto fáctico. Se erige sobre la interpretación inadecuada de los hechos expuestos en un proceso la cual deviene de una inapropiada valoración probatoria, bien porque el juez no contaba con pruebas para sustentar sus afirmaciones, ora porque al estimar su valor demostrativo fue arbitrario. La Corte ha dicho que tal arbitrariedad debe ser *“de tal magnitud que pueda advertirse de manera evidente y flagrante, sin que quepa margen de objetividad alguno que permita explicar razonablemente la conclusión a la cual llegó el juez. En igual sentido, es imprescindible que tal yerro tenga una trascendencia fundamental en el sentido del fallo, de manera que, si no se hubiera incurrido en él, el funcionario judicial hubiera adoptado una decisión completamente opuesta”*.

Así mismo, en la sentencia SU-632 de 2017 se hizo una importante precisión sobre el **defecto sustantivo** y la forma como este se materializa:

“3.4. Por otra parte, la Corte ha establecido que el defecto sustantivo parte del ‘reconocimiento de que la competencia asignada a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar las normas jurídicas, fundada en el principio de autonomía e

independencia judicial, no es en ningún caso absoluta'. En consecuencia este defecto se materializa cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto.' La jurisprudencia de este Tribunal en diferentes decisiones ha recogido los supuestos que pueden configurar este defecto, así en las sentencias SU-168 de 2017 y SU-210 de 2017, se precisaron las hipótesis en que configura esta causal, a saber:

(i) Cuando existe una carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se sustenta en una norma que no existe, que ha sido derogada, o que ha sido declarada inconstitucional.

(ii) La aplicación de una norma requiere interpretación sistemática con otras que no son tenidas en cuenta y resultan necesarias para la decisión adoptada.

(iii) Por aplicación de normas constitucionales pero no aplicables al caso concreto. En este evento, la norma no es inconstitucional pero al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente inaplicada.

(iv) Porque la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia.

(v) Al aplicar una norma cuya interpretación desconoce una sentencia de efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico.

(vi) Por aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien el contenido normativo no ha sido declarado inexecutable, este es abiertamente contrario a la constitución.

Adicionalmente, esta Corte ha señalado que una autoridad judicial puede incurrir en defecto sustantivo por interpretación irrazonable, en al menos dos hipótesis: (i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que esta no tiene

(contraevidente); o (ii) cuando le confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados desproporcionados”.

El **defecto procedimental** se puede estructurar a partir de dos formas: “(i) *la absoluta*, que se presenta en los eventos donde el funcionario judicial sigue un procedimiento diferente al establecido en la ley, u omite alguna de las principales fases del proceso y quebranta los derechos de defensa y contradicción de las partes; y (ii) *por exceso ritual manifiesto*, el cual se manifiesta cuando el fallador desconoce el contenido del artículo 228 de la Constitución Política, en tanto le impide a las personas el acceso a la administración de justicia y el deber de dar prevalencia al derecho sustancial.”⁷

Sobre la configuración del defecto por exceso ritual manifiesto, en Sentencia reciente se hace una recopilación de las situaciones que lo hacen procedente:

“En ese sentido, el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta en los casos donde el juez o magistrado obstaculiza “la efectividad de los derechos constitucionales por motivos formales”, es decir, el procedimiento es una barrera para la eficacia del derecho sustancial y en ese sentido, deniegan justicia, por “(i) aplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva y que en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situación se encuentre comprobada; o (iii), incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas”.

⁷ Sentencia T 119 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

Igualmente, esta Corporación ha reiterado que el funcionario judicial “incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicación en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales”.

Para la procedencia de la tutela por defecto procedimental, en cualquiera de sus dos formas, se precisa la concurrencia de los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional: “(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de [vulnerar] derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada [dentro] del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración [de] derechos fundamentales”.

La línea jurisprudencial de la Corte Constitucional ha sido pasible en sostener que se configura el **defecto orgánico** cuando el funcionario judicial adelanta un proceso sobre el cual no le ha sido asignada una competencia legal y/o constitucional, cuando asumen una que no les corresponde o se manifiestan por fuera de los términos normativamente establecidos para determinado proceso judicial. La manifestación de cualquiera de las anteriores configura una violación al debido proceso.

Otro de los defectos que puede presentarse es el **error inducido** que se materializa cuando, a pesar de que la providencia judicial no tiene vicios de fondo o de forma por cuanto las pruebas y/o procedimientos para proferirla se ajustan al ordenamiento jurídico y a la interpretación de la Ley, los elementos de prueba tenidos en cuenta en la Sentencia eran falsos, equivocados o imprecisos, lo

que ocasiona la vulneración de derechos fundamentales. De conformidad con lo explicado en la Sentencia T-273 de 2017 “(...) se trata de una violación de derechos fundamentales que no es atribuible al funcionario judicial accionado, puesto que el defecto en la providencia es producto de la inducción al error de que es víctima el juez de la causa, por lo que la actuación judicial resulta lesiva de derechos fundamentales.”. Según lo establecido en la Sentencia SU-014 de 2001, para que esta causal proceda, se requiere la comprobación inequívoca de que *i) que la decisión judicial se fundamente en la apreciación de hechos o situaciones jurídicas, en cuya determinación se hayan violado derechos fundamentales por la actuación irregular de terceros; y ii) que tenga como consecuencia un perjuicio ius fundamental.*

Se configura la causal de **desconocimiento del precedente judicial** cuando el juez de instancia desconoce o limita el alcance dado por la Corte Constitucional a un derecho fundamental, apartándose del contenido material de ese derecho sin un motivo suficiente que haga procedente su inaplicación o sin una justificación argumentativa que lo explique. Bajo este entendido, nuestro máximo Tribunal Constitucional ha indicado unos presupuestos para que el desconocimiento del precedente constitucional, prospere: “(i) debe existir un “conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver”, bien sea varias sentencias de tutela, una sentencia de unificación o una de *constitucionalidad* –tanto la parte considerativa como la resolutive- y (ii) que dicho precedente, respecto del caso concreto que se esté estudiando debe tener un problema jurídico semejante y unos supuestos fácticos y aspectos normativos análogos.”⁸

Finalmente, se ha definido que hay **violación directa de la constitución** cuando el Juez de conocimiento de determinado proceso desconoce o aplica indebida e irrazonablemente el valor normativo de los mandatos y previsiones de rango constitucional. Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado que este defecto se configura cuando el Juzgador de Instancia *(i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto, por ejemplo “(a) cuando en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el*

⁸ Sentencia T 208A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

precedente constitucional, (b) cuando se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y (c) cuando el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución”, o (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Norma Fundamental, desconociendo que de conformidad con su artículo 4º “la Constitución es norma de normas”, por lo que en caso de incompatibilidad entre ella y la ley u otra regla jurídica “se aplicarán las disposiciones constitucionales.”⁹

En este caso particular, indica el accionante que en este caso existe una violación al derecho al debido proceso de la parte tutelante, por cuanto, a su juicio, la juez debió rechazar la demanda de reconvención sin embargo, guardó silencio y no alegó dicha inconformidad en las oportunidades que tuvo para hacerlo, por lo que ante el otorgamiento del ejercicio de su derecho de contradicción y de defensa, no existe una violación a alguna garantía fundamental que pueda ser protegida por el juez constitucional.

De conformidad con lo previamente mencionado, se formulan la siguiente:

IV. SOLICITUD

PRIMERA: Se **DECLARE** improcedente la acción de tutela, por cuanto se desconoce la naturaleza misma de la acción de tutela, en cuanto el demandante pretende reabrir un debate concluido y porque no cumple el requisito de subsidiariedad, en tanto el accionante dejó pasar la oportunidad para impugnar la decisión judicial que hoy reprocha, puntualmente la admisión de la demanda de reconvención.

SEGUNDA: Subsidiariamente se **NIEGUE** el amparo invocado en tanto no se existió violación de los derechos fundamentales invocados por el señor Alberto Parada.

⁹ Sentencia T-522 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

V. ANEXOS

1. Poder especial otorgado al suscrito
2. Certificado de existencia y representación legal de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., expedido por la Cámara de Comercio.

VI. NOTIFICACIONES

Al suscrito en la Cra 11A No.94^a - 23 Oficina 201, de la ciudad de Bogotá o en la dirección electrónica: notificaciones@gha.com.co

Respetuosamente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.